



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Demandante:	Jairo de Jesús Ortiz Bedoya.
Demandada:	Integrales Coyba SAS
Tipo de Proceso	Ordinario Laboral
Decisión:	Confirma sentencia.
Radicado y Link:	05360310500120210014901 (118) 05360310500120210014901

En la ciudad de Medellín, a los cuatro (04) días de septiembre de dos mil veintitrés (2023), la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal, María Eugenia Gómez Velásquez, y** como ponente, **Claudia Angélica Martínez Castillo**, se reunió para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión adoptada el día 28 de abril de 2022 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí (Antioquia), en el proceso ordinario laboral adelantado por el señor Jairo de Jesús Ortiz Bedoya versus la sociedad Integrales Coyba SAS.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 dela Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

1. El señor Jairo de Jesús Ortiz Bedoya pretende que se declare que entre él e Integrales Coyba SAS existió un contrato de trabajo a término indefinido que estuvo vigente desde el 01/06/2016 y hasta el 20/12/2019, que finalizó por causa atribuible a la empleadora; por lo que busca se condene a la demandada a pagar las prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social, la indemnización por despido injusto; las sanciones moratorias por no consignación decesantías, por no pago de intereses de cesantías, y la del artículo 65 del CST; costas y agencias en derecho.

2. Fundamentó sus pretensiones en que prestó servicios a la demandada como instalador de cocinas a través de un contrato de prestación de servicios desde el 01-06-2016, cumpliendo horario y órdenes directas de un supervisor, y en contraprestación recibía una remuneración, pero que la vinculación terminó con su renuncia al 20/12/2019, debido al incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa, y en especial por el no pago de prestaciones sociales. Aduce que, durante la vigencia del vínculo este no fue afiliado a seguridad social, ni le fueron pagadas cotizaciones de salud, pensiones y riesgos profesionales.
3. Admitida la demanda e integrada la litis, la parte demandada contestó la demanda de forma extemporánea, por lo tanto, se tuvo por no contestada la misma (Archivo 08, Expediente Digital).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

4. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, en sentencia del 28 de abril de 2022, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva a pesar de que la demanda se tuvo por no contestada en auto del 26/7/2021 y absolvió a la demandada de todas las pretensiones. Señaló que no probó el elemento de subordinación en este caso, así lo argumentó:

en este asunto como se anunció con anterioridad, no existe prueba que permita el despacho colegir que en efecto se cumplió con esa carga demostrativa, pues respecto a la prestación personal del servicio, se adoso a la foliatura solamente la declaración de quien se mencionó era compañero de trabajo del actor el señor Álvaro y este solamente indicó que prestó su servicio a favor de Integrales Coyba desde el año 2017 y hasta el año 2018, cuando se dio la mudanza de este establecimiento a un local diferente, indicó que era instalador de carpintería, al igual que el mismo demandante y reseñó las condiciones en que se laboraba para la época en que fue compañero de trabajo del actor.

No obstante, como se acreditó al interior del plenario, la sociedad hoy demandada fue creada en el mes de diciembre del año 2019, conforme se extrae el certificado de existencia y representación legal visible en la página 14 a 17 del numeral primero del índice de digital.

De esta se logra extraer, se corrige que fue creada el 11 de octubre del año 2019 y por eso no resulta procedente concluir que esa prestación del servicio se estaba dando a favor de la sociedad demandada, conforme se explicó por parte del testigo para ese momento las instrucciones se recibían de manera directa del señor Jairo Alexander Chavarriaga, que a pesar de fungir según ese certificado como representante legal de la sociedad demandada para ese momento, fungía en calidad de persona natural.

En esa medida, entonces no puede concluirse que este fuera el empleador o que tuviera la virtualidad de obligar a la sociedad demandada en esta oportunidad.

Recuérdese que el artículo 2 de la Ley 1258 del 2008, en cuanto a la creación o constitución de las sociedades por acciones simplificadas, establece que con la inscripción de esta en el Registro Mercantil se forma una persona jurídica diferente a los socios, en esa medida, entonces no resulta procedente concluir que en efecto, la persona natural que para ese momento se aduce según la prueba testimonial recaudada ejercía la subordinación frente al señor Jairo, es la misma a quién se le endilga la calidad de empleadora con este proceso judicial, a pesar de que la apoderada judicial, en sus alegatos de conclusión, menciona la constitución o la variación de esta persona jurídica, indicando que existen diversos registros mercantiles o matrículas mercantiles. Lo cierto es que igualmente debe traerse a colación el significado de esta, la matrícula mercantil no es más que el registro en el Registro Mercantil, la matrícula mercantil es la inscripción en el Registro Mercantil de los comerciantes y es una obligación que estos deben cumplir para ejercer el comercio y ellos lo puede hacer la persona

natural y la persona jurídica es un deber de estos, incluso la persona natural debe inscribir en este registro los establecimientos de Comercio.

En esa medida, entonces no resulta procedente equiparar Integrales Coyba como establecimiento de comercio con anterioridad a la creación de la sociedad que ahora se demanda con esta misma sociedad. No tiene conocimiento el despacho o por lo menos no hay prueba de la existencia de subordinación o algún tipo de relación contractual del demandante, señor Jairo de Jesús Ortiz Bedoya, con la sociedad que hoy es llamada a resistir la demanda, toda vez que conforme se desprende de la declaración rendida por el testigo, este mismo, el testigo no tuvo conocimiento de ningún tipo de relación con posterioridad a su retiro de la prestación del servicio a favor del establecimiento de comercio, o mejor en el establecimiento de comercio, y en esa medida, entonces, según su propia manifestación, no supo cómo se desarrolló la relación del señor Jairo con la sociedad y solamente tuvo conocimiento, o menciona que está persistió porque el mismo demandante se lo comentó, situación que no es suficiente para que esta agencia judicial de por demostrada la existencia de la prestación personal del servicio, en los términos que se exige para que se de aplicación a la presunción mencionada, es decir, debe indicarse que en este asunto respecto al término mencionado de existencia de la relación laboral, en cuanto a los extremos, 01 de junio del 2016 a 20 de diciembre del 2019, no se acreditó la prestación personal del servicio a favor de la sociedad demandada, inicialmente desde el año 2016 hasta el momento de su constitución, porque no había nacido la vida jurídica y no se acreditó ninguna figura sustancial que permitiera concluir al interior del proceso que está asumió las obligaciones o se hizo cargo de las acreencias generadas con anterioridad a ese momento y con posterioridad a su creación, porque no hay elemento demostrativo que permita colegir que, en efecto, el demandante en algún momento prestó servicio a su favor.

En esa medida, entonces debe concluirse que la parte actora no asumió en debida forma su carga demostrativa a fin de verse favorecido por la presunción contenida en el artículo 24 del código sustantivo del trabajo.

III. RECURSO DE APELACIÓN:

3.1 RAZONES DEL RECURSO

3.1.1. Demandante

La demandante, a través de su apoderado, criticó que el juzgador haya declarado que no hubo una relación laboral, argumentándolo así:

Teniendo de presente y resaltando la mala fe del empleador en el presente caso, al obviar sus obligaciones legales, teniendo en cuenta que quedó demostrado manera amplia en el proceso, los extremos laborales del demandante, el salario devengado, la jornada laboral y el hecho de despido injustificado y la relación laboral directamente con Integrales Coyba, teniendo como representante legal al señor Jairo Alexander Chavarriaga, también resaltando que el señor Jairo Alexander Chavarriaga como abogado, sabía y tenía conocimiento de sus obligaciones legales y aun así decidió obviarlas, lo que demuestra la mala fe.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandada

Advierte la demandada que, en este caso debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva, así como, declarar probada la excepción de cobro de lo no debido, atendiendo que, la constitución de la empresa hoy demandada se dio el 11 de octubre de 2019, que este término no coincide con el de la supuesta relación

existente entre las partes. Asimismo, cuestiona la parcialidad del testigo presentado, porque según su dicho este tiene una relación de amistad con el hoy demandante.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA.

Conoce la Sala del recurso de apelación de la sentencia en favor de la parte demandante de conformidad con lo señalado en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO.

Esta Sala se ocupará de analizar, si se encuentra probado o no que la relación de trabajo que trenzó a las partes hoy en contienda se desarrolló a través de la modalidad verbal a término indefinido. Y en caso positivo, si hay lugar al reconocimiento de las prestaciones sociales y vacaciones reclamadas, la indemnización por despido injusto, y si procede el pago de las indemnizaciones moratorias pedidas en su demanda.

5.3. HECHOS PROBADOS

Constituyen hechos pacíficos y, por lo tanto, quedan excluidos de la discusión, que la empresa Integrales Coyba SAS, fue matriculada ante la Cámara de Comercio Aburra Sur el día 11 de octubre de 2019.

5.4. EXISTENCIA DEL CONTRATO

Se discute en esta oportunidad si existió o no un vínculo de patrono- empleado entre las partes. Acorde con lo estipulado, en el artículo 23 del CST, para que exista contrato de trabajo deben coincidir los siguientes elementos esenciales:

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren estos tres elementos esenciales:
 - a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
 - b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y
 - c. Un salario como retribución del servicio.

Sin embargo, con el fin de tener por configurado el contrato de trabajo el trabajador deberá demostrar, por regla general la prestación personal del servicio, ello en razón a que el legislador para aliviar su carga probatoria la trasladó al empresario cuando estableció en el artículo 24 del CST la presunción acerca de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza, así, el presunto empleador, para liberarse debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente (C-665 de 1998)

Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción.

Así lo ha entendido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia del 2 de junio de 2009, rad. 34759, señaló:

El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, justamente consagra una presunción a favor de la persona natural que presta servicios personales a otra natural o jurídica, en el sentido de que, bajo ese supuesto fáctico, se entiende que el ligamen que los ata es una relación de trabajo, trasladándose la carga de probar lo contrario al demandado, si desea desvirtuar la presunción.

En fallo de 23 de septiembre de 2008 (Rad. 33526), y de 4 de febrero de 2009 (Rad. 33937), esta Sala de la Corte dejó asentado, en síntesis, que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo contiene una presunción, según la cual, a partir de la acreditación de la prestación personal de un servicio, el pretenso trabajador no corre con la carga de probar el segundo de los elementos del artículo 23 ibídem.

En ese orden, la intelección que el juez de la alzada le imprimió al mencionado artículo 24 fue equivocada, pues, en suma, lo que dicho canon legal quiere significar es que, una vez demostrada la prestación de un servicio personal, la carga de probar que esa vinculación no giró bajo la égida de un contrato de trabajo, gravita sobre el demandado.

Sobre lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la C. S. de J., en Sentencia del 8 de junio de 2016, Radicado 47.385, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, reiterando el criterio que de antaño ha adocinado la Corporación:

“... para la configuración del contrato de trabajo se requiere que esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor del demandado, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica - que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de carácter laboral-, no es menester su acreditación cuando se encuentra evidenciada esa prestación del servicio, dado que en tal evento, lo pertinente es hacer uso de la presunción legal prevista en el artículo 24 del CST, modificado por el art. 2° de la L. 50/1990, según el cual *«se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo»*

De acuerdo con lo anterior, al actor le basta con probar en el curso de la *Litis*, su actividad personal, para que se presuma en su favor el contrato de trabajo, y es al empleador a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción, demostrando que la relación fue independiente y no subordinada."

Ahora, de acuerdo a la modalidad del contrato de trabajo, el artículo 45 del CST establece que:

"El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio".

Y el artículo 47 ibidem, consagra el contrato de duración indefinida así:

1. El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido.

2. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen, y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para que el {empleador} lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8°, numeral 7°, para todo el tiempo, o para el lapso dejado de cumplir.

Situados en este punto recordemos que, la existencia y las condiciones del contrato de trabajo bajo las cuales se pacta el nacimiento de dicho acto jurídico, pueden acreditarse por los distintos medios probatorios ordinarios, así como que en materia laboral el juez no está sujeto a la tarifa de valoración de la prueba, así lo explicó la Sala de Casación laboral, verbigracia en la sentencia CSJ SL4723 de 2019 señaló:

El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

Pueden, pues, los jueces de instancias, al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada."

4.4 DEL CASO EN CONCRETO

El reproche del demandante al fallo de primera instancia consistió en afirmar que sí laboró al servicio de Integrales Coyba, y que la parte demandada de mala fe pretende desconocer la existencia de ese vínculo empleatício.

Tal como señala el artículo 167 del CGP aplicable por analogía del 145 del CST, *«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»*, bajo esta regla, la parte demandante debía probar la prestación personal del servicio en favor de la demandada, para activar la presunción a que se hizo referencia en párrafos anteriores.

Sobre este tema, es preciso recordar lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, referente a que si bien es cierto a la parte actora le basta con probar en el curso de la litis, la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la parte demandada a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado; también lo es, que no queda relevada de otras cargas probatorias, como por ejemplo la demostración de los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se solicita la indemnización respectiva, al respecto ver las Sentencias SL728-2021, SL102-2020, SL447-2019, entre otras; elementos que no aparecen soportados en prueba alguna en este proceso.

Al examinar las pruebas arrimadas por el accionante se observa que aportó certificado de registro mercantil de la sociedad Integrales Coyba SAS, en el que se da cuenta que esa sociedad fue constituida el día 11 de octubre de 2019, es decir, que no tenía existencia jurídica para el año 2016, cuando el señor Jairo Ortiz afirma que inicio la relación laboral, de esa manera el medio adosado no es conducente en cuanto carece de idoneidad para demostrar el hecho de la prestación personal del servicio en su favor, por cuanto para imponer obligaciones a una persona jurídica de derecho privado, era necesario establecer su existencia en el momento de los hechos.

Aunque de acuerdo con el mencionado certificado, el señor Jairo Alexander Chavarriaga Castro es propietario del 100% de las acciones de Integrales Coyba SAS, y esta última se encuentra en situación de control con respecto al primero, esta circunstancia no cambia la conclusión anterior porque el demandante persigue que se declare la existencia de la relación laboral con respecto a la convocada a juicio y no a la persona natural referida, así se extrae no solo del texto del libelo de demanda sino además del recurso en el que se lee *«la relación laboral directamente con Integrales Coyba, teniendo como representante legal al*

señor Jairo Alexander Chavarriaga»

El estado de cuenta de ahorro número 27966436048 de la entidad Bancolombia, de la cual es titular el señor Ortiz Bedoya; de esa documental, se extrae que en ella se realizaron consignaciones por parte del señor Jairo Chavarriaga por medio de transferencias electrónicas, sin que exista certeza de ningún movimiento financiero proveniente de la empresa demandada.

En el interrogatorio que absolvió el señor Jairo Chavarriaga, este reiteró que Jairo Ortiz le hacía trabajos personales a su favor, que nunca tuvo relación con la sociedad enjuiciada; que él le encomendaba tareas al demandante y en un taller propio que tenía o donde se requería el servicio.

El testimonio del señor Álvaro Escobar, tampoco es claro, por cuanto manifestó que conoció a Jairo Ortiz porque laboró con él en la empresa Integrales Coyba SAS, pero afirmó que no tenía conocimiento de la forma de pago, y que le constaban los hechos únicamente hasta el momento en que se retiró de la empresa, con lo que no indicó las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo acontecido o el motivo por el cual recordaba con precisión que el recurrente e inclusive, él mismo, laboró hasta esa fecha, Sin embargo, a partir de lo así expresado no es posible afianzar la decisión en esa declaración, por cuanto al ser indagado por las fechas de inicio y terminación de su vinculación laboral, lo cual resultaba trascendente para establecer la ciencia de su dicho, el declarante dijo no recordarlos, pero si recordaba las del señor Ortiz Bedoya, porque se lo comentó el demandante.

Se trata de un testigo que refiere que estos hechos los conoció indirectamente a través de lo que le comentaba el mismo demandante; acorde con la jurisprudencia relativa a esta temática, el valor persuasivo del testimonio pende de la forma como el declarante llegó al conocimiento de los hechos explicados en su relato, dado que, como no es lo mismo escucharlo que percibirlo, los testigos de oídas tienen poca credibilidad (CSJ SC, 22 de mar. de 2011, citada en la CSJ SL339 de 2022).

Adicionalmente en el interrogatorio que hizo al testigo, la juez le preguntó: «Usted dice que a veces estaban en obras diferentes, cuando usted no se encontraba con el señor Jairo, ¿cómo sabe que él estaba en otra obra prestando el servicio

a favor de Coyba?», a lo que respondió: «Ah, no, porque es que se supone que él está en otra obra, porque unas veces no encontramos allá en lugar de la empresa, y bueno, otra vez decir que estaba otra obra y yo estaba en otra y así no nos veíamos», dejando claro que se trata de un testigo de referencia y que no tenía certeza en que fechas se dio la prestación del servicio, quien se beneficiaba de este, si la prestación de los servicios se dio de forma permanente, y si finalmente la retribución provenía directamente de la persona jurídica demandada.

Ciertamente la circunstancia de que el testigo fuera de oídas no descarta automáticamente el contenido de los hechos que relata y pues este podría constituir un medio de persuasión idóneo, serio y creíble cuando, se encuentra corroborado o respaldado por otros elementos de convicción que no permiten dudar de la veracidad del relato hecho por otras personas al testigo. Este no sucede en el asunto bajo análisis porque el resto del acervo probatorio, conforme se dejó expuesto, no conduce a la prosperidad de las pretensiones, por lo que deberá confirmar la decisión recurrida.

A juicio de la Sala la sentenciadora de primer grado no incurrió en el error de apreciación probatoria endilgado por la apoderada del demandante al absolver ~~a~~ ~~demanda~~ las peticiones que solicita con esta demanda, por tanto, el recurso no prospera y se impondrá condena en costas al recurrente vencido.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en apelación se confirmará.

Costas de segunda Instancia a cargo del demandante, y en favor de la demandada. Liquidense las primeras por el Juzgado de origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VI. DECIDE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, el 28 de abril de 2022, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por el señor Jairo de Jesús Ortiz Bedoya en contra de la sociedad

Integrales Coyba SAS, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Costas en segunda Instancia a cargo del demandante, y en favor de la demandada. Liquídense las primeras por el Juzgado de origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ